

EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACION PÚBLICA

Por: LAURA MURILLO MEJÍA¹

PABLO MURILLO MEJÍA²

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA CASTRILLÓN³

RESUMEN

Este artículo pretende efectuar un análisis sobre la contratación pública en dos aspectos preponderantes, como son la relación de los procesos contractuales con el principio de transparencia, y la manera en que intervienen herramientas jurídicas como el Registro Único de Proponentes, para contribuir a la seguridad jurídica y la eficiencia en dichos procesos contractuales, fundamentado desde los planos legales y jurisprudenciales.

Palabras clave

Contratación Pública, Transparencia, Eficiencia, Registro Único de Proponentes.

ABSTRACT

This article aims to carry out an analysis of public contracting in two main aspects, such as the relationship of contractual processes with the principle of

¹ Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: lauramurilloccp@gmail.com

² Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: pabloomurillomejia@gmail.com

³ Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: angelaarboledac@gmail.com

transparency and the way in which legal tools such as the Unique Register of Bidders intervene, in order to contribute to legal certainty and efficiency in said contractual processes, based on legal and jurisprudential plans.

Keywords

Public Contracting, Transparency, Efficiency, Unique Register of Bidders.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo busca realizar un análisis conceptual y sistemático frente al principio de transparencia en la contratación pública, en relación con el Registro Único de Proponentes. Para desarrollar lo pertinente de la temática se fundamentará desde los planos legales y jurisprudenciales, que alcanzan gran relevancia en términos de garantizar el cumplimiento de otros principios.

Colombia es un país donde la contratación que realiza el Estado es alrededor de 250 billones de pesos, equivalentes a 1.253.268 contratos para el año 2017, de acuerdo con el análisis de transparencia del Ministerio de Hacienda, realizado por TRANSPARENCIA POR COLOMBIA (2017), y en ese devenir se genera daño patrimonial al Estado, entre otros por la corrupción generada entre actores públicos y privados, en el que se sirven unos de otros de manera ilícita, el primero por una gratificación y el segundo por ser privilegiado en determinado trámite o concesión, constituyéndose en un aspecto neurálgico de la Administración Pública, ya que deriva en mala calidad de las obras, o de los bienes y servicios requeridos por el Estado, incumplimiento de contratos y toda suerte de irregularidades que van minando las finanzas del Estado.

Para compensar el flagelo de la corrupción, el Estado colombiano ha desarrollado un compendio jurídico, basado en principios y valores que lo fundamentan.

Este escrito, de naturaleza jurídica, tendrá como fundamento algunas de dichas normas: La Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), de gran significado para el desarrollo de este documento, ya que despliega los principios que rigen la contratación pública, Ley 1150 de 2007, Decreto 19 de 2012, y Ley 1082 de 2015, las cuales disponen de un escenario de transparencia y eficiencia en la contratación estatal.

1. APROXIMACIÓN AL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Analizando la normatividad colombiana se determina que el RUP consiste en el asiento que el Estado le delegó a las Cámaras de Comercio, para que las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia, puedan contratar con el estado.

Para obtener el RUP se debe haber renovado la matrícula mercantil; las cámaras acarrean la función del RUP, el cual es de creación legal, público, y tiene la instrucción de las personas que quieran obtener contratos con el Estado.

Caracterización del RUP



Fuente: <http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/rup/que-es-el-rup.html>

De manera consecuente con la norma, quienes deben inscribirse con el Registro Único de Proponentes son:

- a) **Personas Naturales.** Cualquiera que tenga la intención de contratar con el estado así no se encuentre inscrito como comerciante, pero se debe revisar el lugar de residencia en el RUT. Este tipo de persona nunca tiene revisor fiscal.
- b) **Personas Jurídicas.** Deben estar inscritas en la Cámara de Comercio, en cualquier tipo de sociedad, pueden ser personas jurídicas, que son las que se encuentran inscritas en la cámara de comercio, y personas jurídicas no inscritas, que son las que se encuentran inscritas en cualquier otra entidad estatal; este tipo de persona sí tiene revisor fiscal, por lo tanto debe firmar toda la documentación a presentar.

Ahora bien, el grupo empresarial es la sociedad matriz que se encarga de otras sociedades contratadas o subordinadas, y la sucursal extranjera es un

establecimiento extendido por una sociedad, dentro o fuera de su residencia; escasamente se ven estos proponentes en la Cámara de Comercio de Pereira.

Es de recalcar que la Cámara de Comercio realizará el registro con la inscripción, la cual se hace por primera vez, y es posible hacerse en cualquier época del año; se debe tener en cuenta que si hablamos de una sociedad nueva no tiene ni estado de flujo, ni estado de efectivo, ni estado de cambios en el patrimonio. La Cámara de Comercio verifica que la parte financiera que adjunta el interesado corresponda con la brindada en el registro mercantil, con el fin de garantizar la transparencia; otro aspecto es la renovación que se realiza del 1° de enero al 6 de abril, teniendo en cuenta que si no se aportan los documentos el 7 de abril cesarán los efectos, por lo tanto se quedarán sin registro y al año siguiente los proponentes deberán comenzar de cero.

La actualización es cuando la información financiera nunca se modifica y puede ser en cualquier época del año; para dicha actualización se solicitan tres documentos: pagos parafiscales, tarjeta profesional de contador, y comprobante de la junta de contadores. Se debe tener en cuenta que si una persona jurídica tiene revisor fiscal solo este debe firmar los documentos; la cancelación se da, por ejemplo, cuando el contador haya digitado mal, y puede ser en cualquier época del año.

Para la obtención de dicho RUP son necesarios algunos requisitos, exigidos por la Cámara de Comercio, los cuales se explicarán a continuación.

Para la persona jurídica los requisitos habilitantes son capacidad jurídica, clasificador de bienes y servicios, experiencia e información financiera; se explicará paso a paso cada, con el fin de dejar una claridad frente al problema que se plantea.

La capacidad jurídica consta de cuatro elementos fundamentales:

- a) Copia del RUT, si esta no ha sido anexada anteriormente, ya que la Cámara de Comercio no debe solicitar documentos que con anterioridad han sido anexados, esto con el fin de ser eficientes.
- b) Una certificación del tamaño empresarial, la cual debe ser debidamente firmada: aquí es donde comenzamos a ver la problemática frente a la transparencia del RUP. ¿Qué tan confiables son las firmas de estos certificados? Esta es una de las problemáticas que se resolverá a lo largo de este trabajo de investigación.
- c) Aportes parafiscales, que son contribuciones de carácter obligatorio impuesto por la ley en cabeza de los empleadores, que se determinan sobre la base gravable de nómina total. Este documento es necesario aportarlo con una vigencia de un año, inmediatamente anterior a la expedición del documento.
- d) Documento en el que evidencie si el proponente es parte de un grupo empresarial o no; así mismo se solicita el documento para saber si ejerce control o no sobre otras sociedades.

1.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Es para diferenciar los códigos y así poder clasificar las diferentes actividades económicas que tiene cada proponente. Son ocho códigos y se acreditan seis.

Aquí se abarca una dificultad frente al clasificado, ya que son los proponentes quienes ingresan sus propios códigos a través de la plataforma, y muchas veces se dificulta la búsqueda de cada uno de los códigos puesto que son bastantes. Adicionalmente, cuando un proponente no renueva un año debe inscribirse nuevamente desde cero, como si nunca lo hubiese hecho, por lo que se deben ingresar todos los códigos de nuevo.

1.2. EXPERIENCIA

Llegando a uno de los puntos más complejos frente al principio de transparencia del RUP, nos encontramos con que los proponentes deben anexar copia del contrato ejecutado, orden de compra, orden de servicio, acta de liquidación, aceptación de ofertas irrevocables, certificación del tercero que recibió el bien, obra o servicio, para lo cual es necesaria la fecha de terminación del contrato. Son obligatorios cinco requisitos: valor del contrato, partes que integran el contrato, cuál es el objeto del contrato, firma y duración del contrato, esta duración con el fin de saber la fecha en que se ejecutó el contrato.

Una problemática que se tiene en la actualidad es que la Cámara de Comercio no tiene la facultad de verificar si los soportes de la experiencia son reales. Es decir, no se sabe si las certificaciones de los terceros realmente las expidieron los contratantes que allí figuran, y si las copias de los contratos que llegan realmente se ejecutaron, o si los proponentes falsifican algún documento o firmas, todo como resultado de que la Cámara solo tiene una función verificadora, lo cual puede generar dificultades por presuntas falsedades al momento de que los concurrentes o las personas que estén obligadas a estar en el RUP presenten ese tipo de documentación alterada en procesos contractuales, lo que se explicará más adelante.

Debemos tener en cuenta que cuando las personas jurídicas tienen poco tiempo de constituidas, pueden demostrar su experiencia con referencias de los socios.

1.3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Actualmente todos los estados financieros deben realizarse bajo las normas NIIF, y a la Cámara de Comercio se le debe anexar la declaración donde se

observe que cumple con estas normas, debidamente suscrita por el contador o el revisor fiscal y el representante legal. Así mismo se deben anexar los estados con su vigencia correspondiente; si la empresa lleva más de dos años de constituida se deben anexar los estados con dos años de vigencia para poder realizar las similitudes o el comparativo, y si es una sociedad nueva con el año inmediatamente anterior.

Las personas naturales no están obligadas a presentar estados financieros, mientras que las personas jurídicas sí están obligadas a presentarlos.

Es importante conocer el tamaño de cada empresa para saber si es microempresa, pymes o gran empresa, porque de acuerdo a esto se exigen distintos documentos:

- a) Certificación de los estados financieros.
- b) Certificación para gastos de interés debidamente firmados.
- c) Certificación de las cuentas principales.
- d) Certificación de las distintas cuentas.
- e) Fotocopia de la tarjeta profesional y certificados de la junta de contadores con un vigor no superior a tres meses (el contador no debe estar sancionado).

Cuando se ingresa la documentación en la Cámara de Comercio y se incurre en algún error, se devuelve una sola vez; si al presentar la corrección persisten los errores se debe rechazar, y el proponente debe iniciar nuevamente el trámite, lo que se denomina devolución condicional y devolución de plano.

Los términos son: quince días hábiles para inscribir cuando se tiene toda la documentación, 10 días hábiles para devolver, 30 días hábiles para corregir y reingresarlo nuevamente.

Es de anotar que, si algún proponente pretende registrarse en un domicilio diferente al suyo, debe rechazarse de plano.

A partir del año 2012 hubo una modificación para el RUP para realizar su inscripción, renovación y actualización. Se suprime la aptitud (puntajes) y la capacidad de contratación. Se adicionará la información referente del tamaño empresarial: gran empresa, media, pequeña o microempresa.

Las personas naturales profesionales acreditarán su experiencia a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, salvo los ingenieros, arquitectos o profesionales afines, quienes se rigen por lo establecido en la Ley 843 de 2003.

La dirección comercial y de notificaciones de los proponentes matriculados o inscritos en el registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro, pasarán automáticamente al Registro Único de Proponentes, sin pago para su actualización.

Por otra parte, encontramos en la página de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (2018) el alcance que el Estado le otorga al principio de transparencia en la contratación estatal, del cual predica que este comprende otra serie de principios y reglas tales como:

- i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración;
- v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta;
- v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración.

Definido el contexto de análisis, es importante delimitar el tema en estudio, que nos lleve a comprender si la problemática que se genera en el ámbito estatal con respecto a las falencias en la transparencia de la contratación puede atenuarse mediante el Registro Único de Proponentes. El cuestionamiento que se plantea se resolverá analizando los principios, la normativa y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Debe considerarse la importancia de la presente reflexión, en el hecho que el Estado en los procesos contractuales compromete partidas importantes, factores como las asignaciones de endeudamiento y rubros presupuestales orientados a cumplir con obras de gran alcance y requeridas para el desarrollo de los territorios, encontrándose con proyectos que no culminan, de baja calidad, con sobrecostos, entre otros.

Por otra parte, la ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (2017) creó el índice de percepción de la corrupción, consistente en la calificación que manifiesta la percepción de empresarios y versados en la materia, de alrededor de 180 países con respecto al nivel de corrupción en el sector público, valiéndose de una escala de cero, cuando el país se considera muy corrupto, hasta 100 para países muy transparentes. Para el año 2017 este índice permitió establecer que aproximadamente dos tercios de los países obtuvieron una calificación inferior a 50, y en promedio los países se situaron en un puesto 43. Colombia para el año 2017 obtuvo 37, puntos y aunque su puntuación ha permanecido así desde 2016, ha desmejorado en el ranking internacional, ya que su posición respecto al resto de los países ha caído al número 96, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental (ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2017).

De los casos que se presentan en el país podemos mencionar el carrusel de la contratación que se descubrió durante la administración del Alcalde Samuel

Moreno en Bogotá (2010), y que le generó al Estado un detrimento patrimonial de 2,2 billones de pesos (MONTAÑO, J., 2016), y más reciente el escándalo de corrupción de Odebrecht, sin embargo, pero no tan renombrado, encontramos escenarios deportivos o plantas de producción, clínicas y hospitales que no funcionaron nunca, en departamentos donde dichas pérdidas hacen menos viable el ente territorial.

1.4. DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN Y EL RUP

El principio de transparencia, como un baluarte de la Contratación Estatal, está consagrado a través de la legislación que rige su procedimiento. La Ley 1437 de 2011 (art. 3º) prescribe que todas las actuaciones y operaciones de la administración deben estar irradiadas por los principios constitucionales, los principios que orientan la función administrativa del Estado, y los principios de las normas especiales.

La guía de contratación pública para micro y pequeñas empresas, MIPYME, define el principio de transparencia como “(...) la necesidad de que todo el proceso de selección del contratista se haga de manera pública, y que cualquier persona interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso” (MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2018), por tanto las decisiones que surjan en el proceso deben motivarse y garantizar la posibilidad de contradicción, de manera que la actuación de la administración sea clara.

Partiendo del análisis axiológico y normativo, la Constitución de Colombia (1991), al referirse en el artículo 209 a la función administrativa, cita los principios que la integran: “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” (GÓMEZ, 2018, p. 331) además de señalar que

el objetivo de la función administrativa está orientada hacia el cumplimiento de los fines del Estado, los cuales consagra el artículo 2° de la Carta (1991), que entre otros se refiere a que el Estado debe velar por la prosperidad de los ciudadanos y garantizar la efectividad de sus derechos, así mismo, propender por la inclusión de todos en las decisiones que les competen, así como en las condiciones económicas, políticas, administrativas y culturales del país, y garantizar la seguridad del territorio y de sus asociados (GÓMEZ, 2018).

Por otra parte, la Ley 80 de 1993 (art. 23) expone los principios contractuales de las entidades estatales, señalando que dichas actuaciones deberán estar regidas por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como por los fundamentos que orientan la función administrativa, los principios generales del derecho y los del derecho administrativo, en las funciones inherentes a los principios, es decir en los aspectos interpretativos e integradores.

Con respecto del Principio de Transparencia, la Ley en mención, en el artículo 24, promueve la igualdad entre los participantes en los procesos contractuales, para lo cual ofrece reglas claras en los procedimientos y las posibilidades de controvertir informes, conceptos y las decisiones que se tomen. También, garantiza el ejercicio del derecho del artículo 273 constitucional en los casos de la publicidad de las licitaciones, y en general de las actuaciones de las autoridades en la contratación, respetando la reserva de documentos que legalmente no pueda ser de conocimiento de terceros.

Por su parte, la Ley 1150 de 2007, en cuya ponencia del 28 de abril de 2006 para segundo debate del Senado establecía que el Proyecto de Ley N° 020 de 2005 procuraba reorientar la contratación, evidenciando que el espíritu de la ley era instituir un escenario de transparencia y eficiencia en la contratación estatal, elevándola a política de económica y social, e incentivando al uso de

mecanismos tecnológicos de manera que ofrezca garantías y transparencia a los proponentes, contratantes y al mismo estado (SUÁREZ, 2009).

Una de las etapas del proceso de contratación estatal, que guarda relación con el Registro Único de Proponentes, es la precontractual, y de manera específica el proceso al que se refiere la Ley 1150 de 2007 (art. 5°), sobre la Selección Objetiva, en la que explica el procedimiento para garantizar la objetividad en la selección del proponente, manifestando que su visibilidad es posible cuando la elección se rige por criterios de favorabilidad en el precio para la entidad contratante y para el objeto mismo del contrato, así mismo, cuando no se presentan preferencias subjetivas en la elección, para lo es de categórica importancia que en los pliegos de condiciones y en los factores de elección y calificación, se considere los requisitos habilitantes, que verifican las Cámaras de Comercio a los proponentes, cuando así lo requieren.

Señala SUÁREZ (2009) que en la Ley 80 de 1993 el principio de selección objetiva no tenía la claridad necesaria, ya que se confundían las circunstancias de los proponentes con las características de la oferta, lo cual condujo a asignarle valor o puntaje a las condiciones del primero, generando sesgos en la decisión o favorecimiento a determinado postulante. La citada Ley 1150 (2007) establece que las circunstancias del proponente deben ser tomadas como requisitos habilitantes, que permiten determinar la idoneidad de este, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales que este adquiere con la administración una vez adjudicado el contrato. Permite también esta norma extraer del proceso la valoración del proponente por sus circunstancias, ya que no permite que sean objeto de valoración, sino de verificación, como criterio de capacidad, de tal forma que pasa o no pasa las condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacionales, las cuales son proporcionales a la naturaleza y valor del contrato.

El artículo 6°, de la referida Ley 1150, relativo a la verificación de las condiciones de los proponentes, prescribe la obligación de quienes aspiren contratar con el Estado de inscribirse ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal en el Registro Único de Proponentes, exceptuando los siguientes casos, en los cuales será la entidad contratante responsable de verificar las condiciones del proponente:

(...) en la contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole.

Sin embargo, las Cámaras de Comercio cuentan con la potestad de abstenerse de realizar un registro, una renovación o actualización del RUP, en las ocasiones en que la información sea insuficiente, inconsistente, o no presente las características de existencia y validez.

La norma (Ley 1150 de 2007) también expresa la obligación de las entidades estatales de informar acerca de “los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados” (art. 6°), actualización que debe realizarse mensualmente.

Así mismo, se refiere a la impugnación de la calificación y clasificación, estableciendo que cualquier persona puede presentar recurso de reposición con respecto a la inscripción dentro de los 10 días hábiles seguidos a la

publicación, con la prestación de garantía bancaria o de compañía de seguros para responder por los perjuicios si los causara al inscrito.

Si la decisión está en firme el camino a seguir por el interesado es la vía jurisdiccional mediante una acción de nulidad. Si se presenta el caso de haberse iniciado el proceso de selección y se advierten inconsistencias en la información inscrita en el RUP, que afecte la capacidad o idoneidad del proponente, podrá la contratante impugnar ante la Cámara de Comercio que expidió el RUP, y suspender el proceso sin medidas de caución. De comprobarse graves inconsistencias el proponente correrá con las sanciones administrativas y penales que señala la ley.

Si bien a través del Congreso de la República se ha generado la normativa en materia de contratación enmarcada en el principio de transparencia, así como sobre el instrumento del Registro Único de Proponentes, la jurisprudencia señala que en los casos en que la Administración celebra negocios jurídicos encaminados al logro de intereses colectivos, esta tiene unas restricciones en aspectos como la elección de los contratistas, ya que dicho procedimiento no debe realizarse de forma libre por la autoridad, sino que debe cumplir con las formalidades que establece el legislador para la selección, de manera que se garantice una deliberación enmarcada en los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad, economía, celeridad, eficiencia y eficacia, así como el aseguramiento de la oferta más conveniente a los fines del interés público.

El CONSEJO DE ESTADO (2010), en una ponencia con respecto a la acción de nulidad sobre los procedimientos de selección de contratistas, define el Registro Único de Proponentes como un acto administrativo que permite certificar la idoneidad del proponente para contratar, habilitándolo para constituirse como participante en los procesos de contratación que realice el Estado en los casos que la ley así lo prescriba, además destaca que el registro es susceptible de control de legalidad.

Puede también inferirse de la sentencia citada, la relevancia que el magistrado le concede a los principios en materia de contratación pública entre ellos a la transparencia en los procesos de selección de los contratistas y otorga al RUP la categoría de instrumento a través del cual se logra establecer un filtro que le de claridad y objetividad a dicha selección.

En igual sentido, el CONSEJO DE ESTADO (2016) asevera que los principios de transparencia y economía en la contratación pública se supeditan al cumplimiento de la planeación y la selección objetiva para lograr la satisfacción del interés general. Igualmente, al referirse al Principio de Transparencia en la contratación, aduce que la garantía de este permite efectivizar la supremacía del interés general, la libre concurrencia de los contratistas, la igualdad de los oferentes, la publicidad de los requisitos y condiciones para la contratación, la selección objetiva del contratista y el derecho de contradicción sobre las decisiones de la administración en lo atinente a la materia.

En CONSEJO DE ESTADO (2011) manifiesta la obligación que las autoridades deben observar al cumplimiento de los preceptos principialísticos y normativos que sustentan la contratación estatal, especialmente el principio de transparencia, el cual es de gran significado ya que se encamina a evitar la desviación y abuso del poder, y así mismo insta a las autoridades a llevar a cabo los procesos de selección objetiva y el cumplimiento de las normas en la materia, de manera clara y prístina.

CONCLUSIONES

La solución a la problemática de la transparencia en la contratación estatal no solo debe ser una finalidad para la administración pública, sino una exigencia por parte de la sociedad colombiana, ya que implica el manejo eficiente y claro de recursos encaminados al bien general, que provienen del esfuerzo y el

trabajo de todos los colombianos, y son entregados al Estado con el propósito de un uso racional, eficiente y transparente, para que cumpla con la misión de revertir en beneficios a sus asociados.

Desde la perspectiva de los contratistas, también se generan circunstancias que afectan la transparencia en la contratación; podemos observar que su propósito, por obvias razones, es que se les adjudique el contrato, y para ello utilizan factores diferenciadores como la calidad, aspectos financieros de precio y garantía, experiencia, entre otros, sin embargo en ocasiones estas diferencias se utilizan con una connotación negativa, generando fraude al proceso de contratación a pesar del rigor de los requerimientos en el proceso de selección, y en ocasiones vemos estos procesos envueltos en carruseles de corrupción.

Por las razones anteriormente expuestas se crea la necesidad de generar transparencia en la contratación, entendida por el Estado a partir del fortalecimiento de los marcos jurídicos, y una muestra de dicho fortalecimiento es la imposición de nuevos requisitos que favorezcan la verificación de los documentos que soportan los procesos de la contratación, entre ellos los denominados requisitos habilitantes de los proponentes mediante mecanismos como el Registro Único de Proponentes.

Comprendiendo integralmente lo que es el RUP, podemos inferir que se refiere a un documento que le otorga fe pública a la experiencia del contratista, a la idoneidad financiera y organizacional, habilitándolo para acceder a los procesos de contratación con respecto a los requerimientos del el Estado para su propio mantenimiento y para la ejecución de obras, compra de bienes y servicios, y en general para suplir las necesidades de la misma sociedad y el bien común.

Anteriormente las entidades públicas debían verificar cada aspecto con base en certificados y documentos que presentaba el contratista, pero esta revisión o verificación se prestaba para múltiples cuestiones, por ejemplo, que la entidad interpretara de manera autónoma, de buena o mala fe, la información, y con ello favoreciera o excluyera a los contratistas en algunas ocasiones sin un sustento objetivo.

El RUP es un mecanismo creado para que las Cámaras de Comercio, aun siendo una entidad particular, colabore con la administración verificando la información referente a los requisitos habilitantes del proponente, bajo unos procedimientos estandarizados tanto en la presentación como en su revisión y análisis, permitiendo disminuir la subjetividad de las entidades contratantes. Desde ese punto de vista el RUP le otorga un gran valor a la transparencia en la contratación estatal.

Así mismo, del análisis de los requerimientos jurídicos para la gestión en materia de contratación estatal, se concluye que el RUP sí garantiza la transparencia, primero por las exigencias del trámite en la Cámara de Comercio frente a los requisitos para conformar el Registro Único de Proponentes. Igualmente, el Estado a través de sus entidades al momento de la contratación también ejerce unos filtros al evaluar las propuestas, de manera que, si acaso existen factores ocultos que minen la legalidad del proceso, pueden superarlos en ese momento, por lo tanto el RUP es un mecanismo que contribuye, junto con otros establecidos por el Estado colombiano con base en el marco jurídico revisado y otros sobre el tema, a garantizar escenarios de transparencia en materia de contratación estatal.

BIBLIOGRAFÍA

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA (2018). *Registro de Proponentes*. Disponible en: <https://www.camarapereira.org.co/es/ipaginas/t/G335/1165/proponentes/>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2011). Ley 1437. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html (22/09/18)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1993). Ley 80. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html

Guía de contratación pública para micro y pequeñas empresas MIPYME. Disponible en: <http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/guiapymes/c4i2.html>

POLLAKUSKY & HORNSBY (2018). Índice de Percepción de la Corrupción 2017. Disponible en: https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_d_e_la_corrupcion_2017_muestra_una_fuerte_presencia

SUÁREZ, G. (2009). *La Nueva Contratación Pública en Colombia*. 1ª ed. Bogotá: Legis Editores.

GÓMEZ, F. (2018). *Constitución Política de Colombia de 1991*. 29ª ed. Bogotá: Ediciones Leyer. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-mitad-de-contratos-publicos-en-colombia-en-2017-fueron-directos-174438>

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (2018). *Principios de la Contratación Estatal*. Disponible en: <https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal>

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA (2010). Sentencia de abril 14. Rad. 110010326000200800101 00 (36054). C.P.: Enrique Gil Botero. Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (2016). Sentencia de enero 27. Rad. 760012331000200502371 00 (49.847). C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. (2011). Sentencia de enero 31. Rad. 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767). C.P.: Olga Mélida Valle de De la Hoz. Bogotá.

MONTAÑO P., J. & MONTAÑO O., E. (2016). *La contratación pública y sus actos de corrupción desde el ejercicio de la profesión contable. Caso de estudio: Carrusel de la contratación en Santa Fe de Bogotá, D.C., años 2010-2016*. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Maestría en Contabilidad.